



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso	Ejecutivo Conexo
Radicación	05001-31-05-019-2019-00525-01
Demandante	MARIA ELENA RESTREPO DE MERIZALDE, ALONSO RESTREMESA, MARTA CECILIA RESTREPO MESA, OLGA DE SANTISIMA TRINIDAD RESTREPO DE RESTREPO, ALBERTO RESTREPO MESA, JUAN JOSE RESTREPO MESA, AMARIA RESTREPO MESA Y CARMEN RESTREPO DE RESTREPO, herederos de la señora Lucia del Rosario Restrepo de Arango
Demandado	Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP
Asunto	Apelación auto excepciones
Procedencia	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Costas Procesales

Medellín, mayo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA

GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el interlocutorio proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 21 de abril de 2023, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de pago total de la obligación y prescripción y se ordena continuar la ejecución.

1.- ANTECEDENTES

El poderhabiente judicial de la señora LUCIA DEL ROSARIO RESTREPO DE ARANGO promovió demanda ejecutiva laboral conexa en contra de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES–U.G.P.P., pretendiendo se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales liquidadas dentro del proceso ordinario surtido entre mismas partes, en cuantía de \$41.708.739; más los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del juicio ejecutivo.

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 04 de octubre de 2019, libró mandamiento de pago en favor de la ejecutante y en contra de la entidad, por las costas procesales adeudadas, negando las demás pretensiones.

Esta agencia judicial por auto del 26 de agosto de 2021, declaró la nulidad de la actuación procesal a partir del auto que libra mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo conexo en virtud del fallecimiento de la promotora del litigio, hecho ocurrido con antelación a la radicación de la demanda, con el fin de que se inadmitiera el libelo ejecutivo, a efectos de que el apoderado aportara el poder que lo faculte para actuar en nombre de los herederos de la ejecutante, llamados a sucederla en el proceso ejecutivo conexo.

El 22 de agosto de 2022, el juzgado cognoscente libró nuevamente mandamiento por la vía ejecutiva laboral en favor de los señores MARIA ELENA RESTREPO DE MERIZALDE, ALONSO RESTREMESA, MARTA CECILIA RESTREPO MESA, OLGA DE SANTISIMA TRINIDAD RESTREPO DE RESTREPO, ALBERTO RESTREPO MESA, JUAN JOSE RESTREPO MESA, AMARIA RESTREPO MESA Y CARMEN RESTREPO DE RESTREPO en calidad de herederos de la señora LUCIA DEL ROSARIO RESTREPO DE ARANGO, en contra de la UGPP por la suma de \$41.758.739 por concepto de costas y agencias de derecho de primera y segunda instancia a cargo,

Enterada de la providencia la ejecutada se opuso a la ejecución y propuso las excepciones de pago; prescripción y compensación. (anexo14.EscritoExcepcionesUGPP.pdf folios 3)

1.1.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES

En audiencia pública celebrada el 21 de abril de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada; ordenó seguir adelante la ejecución en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” y a favor de los señores MARIA ELENA RESTREPO DE MERIZALDE, ALONSO RESTREPO MESA, MARTA CECILIA RESTREPO MESA, OLGA DE SANTISIMA TRINIDAD RESTREPO DE RESTREPO, JORGE ALBERTO RESTREPO MESA, JUAN JOSE RESTREPO MESA, ANA MARIA RESTREPO MESA y CARMEN RESTREPO DE RESTREPO, como herederos de la señora Lucía Restrepo de Arango, en iguales términos a los dispuestos en el mandamiento de pago; condenó en costas UGPP y exoneró a las partes de presentar la liquidación del crédito.

1.2.- RECURSO

La apoderada la UGPP interpuso el recurso de apelación, argumentando que bien no discute los requisitos formales del título, para la UGPP resulta imposible cumplir en la obligación de pago de las costas procesales, tal como lo ha dispuesto la entidad en el auto ADP 036 del 05 de enero de 2023. y el acta 2787 del 14 de marzo de 2023, considerando que no se encuentra acreditado dentro de la sucesión de la inicialmente ejecutante las hijuelas que le corresponderían a cada uno de los herederos.

Expone que, si bien la objeción no corresponde taxativamente a las excepciones dispuestas por el artículo 442 numeral segundo del Código General del Proceso, itera existe una imposibilidad de dar cumplimiento a la obligación, razón por la cual solicita se revoque la decisión y en el caso que se considere procedente seguir adelante con la ejecución, se revoque la condena en costas, teniendo en cuenta que administrativamente no ha sido posible acatar la orden de ejecución.

1.3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos ninguna de las partes emitió pronunciamiento.

2.- CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **apelación**, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO:

El problema jurídico a dirimir, radica en determinar:

¿Si es procedente revocar el auto por medio del cual el Juzgado de primer grado, declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución, verificando si la UGPP se encuentra en imposibilidad jurídica de cumplir la obligación ejecutada, por no estar determinados los porcentajes en los cuales debe pagarse la obligación a cada uno de los herederos pretensores?

2.2.- TESIS

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual el argumento en que se apoya la entidad accionada para no realizar el pago de la obligación ejecutada no resulta justado a derecho, en tanto está acreditada la calidad de herederos de los promotores del proceso, quienes están representados por mandatario judicial que los representa y a quien se le otorgó la facultad expresa para recibir. En consecuencia, debe **CONFIRMARSE** la providencia apelada, como se explica:

2.3.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 442 del Código General del Proceso, establece:

“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

*2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, **sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,** siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida”. (negrilla de la Sala)*

Bajo este marco normativo, quien es condenado judicialmente al pago de una obligación, solo puede exonerarse del cumplimiento de la sentencia si acredita que la misma se ha extinguido por cualquiera de las formas legales.

En este litigio la demandada formuló las excepciones de pago, prescripción y compensación, las cuales fueron declaradas no probadas por el a quo, ordenando seguir adelante con la ejecución, decisión que no fue objeto de disenso por entidad ejecutada y que consecuentemente no puede ser revisada en segunda instancia, memorando que *“Los procesos ejecutivos parten de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. No se trata de debates judiciales en los que las partes defienden la existencia o no de un derecho, en los que no se sabe si la parte acusada tiene o no la obligación que el demandante alega; se trata de procesos en los que la parte demandante aporta un título que presta mérito ejecutivo y que ofrece una certeza al debate judicial.”* (sentencia C1091 de 2003)

Ahora, aduce la UGPP que los ejecutantes no reúnen los requisitos legales para acreditar la calidad de herederos respecto de la causante, dado que la Escritura Pública No. 1464 del 10 de noviembre de 2020, otorgada en la Notaria Primera del Circulo de Medellín, mediante la cual se realizó la adjudicación de bienes en la sucesión de la señora LUCIA DEL ROSARIO RESTREPO DE ARANGO, no incluyó la hijuela correspondiente a las costas derivadas del fallo declarativo ni indica los porcentajes (%) del derecho a favor de cada uno de los herederos sobre la respectiva hijuela.

Pues bien, se observa que el recurso de apelación se contrae a la “imposibilidad jurídica de cumplir la obligación”, alegada por la pasiva y que tal planteamiento, como lo advierte la misma apoderada recurrente, no se encuadra en las excepciones legalmente permitidas, razón que sería suficiente para denegar el recurso.

No obstante, revisado el asunto, la Sala encuentra que son acertadas las reflexiones que sobre este punto expuso el a quo, en primer lugar, es claro que por tratarse de un proceso ejecutivo conexo los herederos actúan como sucesores procesales de la señora LUCIA DEL ROSARIO RESTREPO DE ARANGO y que se encuentra plenamente acreditada la calidad de herederos conforme a la Escritura Pública No. 1464 del 10 de noviembre de 2020, contentiva de la sucesión intestada de la misma. (folios 2 anexo11 PoderDemandante.pdf.)

En segundo lugar, los herederos y sucesores, se encuentran representados por apoderado judicial constituido ante la accionada y ante el juzgado cognoscente para que en su nombre y representación *“inicie las gestiones pertinentes para el respectivo cobro de las costas y agencias en derecho causadas dentro del proceso ordinario laboral con radicado 0500131050192014094700.”*, a quien se faculta expresamente para **recibir**, véase folio 165 anexo14.EscritoExcepcionesUGPP.pdf y folio 20 del anexo 11.PoderDemandante.pdf. En este orden de ideas, el poder autoriza a la entidad ejecutada a realizar el pago a través del poderhabiente judicial, sin que corresponda a la UGPP realizar la distribución entre los diferentes herederos.

De igual forma y, en tercer lugar, no puede olvidarse que la obligación que se ejecuta son las costas procesales ordenadas en favor de la promotora del proceso en el trámite ordinario y al ser sucedida por sus herederos en el trámite de ejecución, el derecho corresponde en forma conjunta a estos, en proporción de igualdad, teniendo en cuenta que, conforme a la escritura pública de sucesión ya referenciada, los demás bienes de la masa sucesoral fueron adjudicados.

Así pues, en tanto se trata de una obligación conjunta y divisible, según la previsión del artículo 1583 del Código Civil, “cada uno de los acreedores puede

solo exigir su cuota (...)” misma que se divide en partes iguales, ante la ausencia de regulación por las partes.

Finalmente, es de anotar, que, si bien, la Circular 58 del 6 de octubre de 2022, emitida por la Superintendencia Financiera, mediante la cual se regulan los montos actualizados de los beneficios de inembargabilidad y exención del juicio de sucesión, señala que no requieren este trámite las acreencias en cuantía de hasta \$74.358 288, tal norma, a reflexión de la Sala, sería aplicable solo en relación con los depósitos judiciales a cargo del Banco Agrario, conforme al numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que señala:

*“7. Entrega de depósitos sin perjuicio de sucesión. Si muriere una persona titular de Depósitos Electrónicos a los que se refiere el artículo 2.1.15.1.1. del Decreto 2555 de 2010, o de una cuenta en la sección de ahorros, o de una cuenta corriente, o de dineros representados en certificados de depósito a término o cheques de gerencia, **o de cualquier otro depósito cuyo valor total a favor de aquella no exceda del límite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965,** y no hubiera albacea nombrado o administrador de los bienes de sucesión, el establecimiento bancario puede, a su juicio, pagar el saldo de dichas cuentas, o los valores representados en los mencionados títulos valores —previa exhibición y entrega de los instrumentos al emisor— al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, o a los herederos, o a uno u otros conjuntamente, según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión. Como condición de este pago el establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la presentación de las debidas renunciaciones, la expedición de un documento de garantía por la persona a quien el pago se haga y el recibo del caso, como constancia de pago. Por razón de tal pago, hecho de acuerdo con este numeral, el establecimiento bancario no tendrá responsabilidad para con el albacea o el administrador nombrados después.” (negrilla de la Sala)*

En esta causa no hay evidencia que se haya constituido, a la fecha, depósito judicial por los valores ejecutado, por lo que, en principio, no se está en la esfera de aplicación de la disposición citada, no obstante, ello no impide el pago por parte de la entidad, habida cuenta que, como ya se precisó, existe juicio de

sucesión y hay certeza que los sucesores procesales tienen la calidad de herederos y que no existe pasivo herencial.

En este contexto, es procedente CONFIRMAR el auto recurrido, puntualizando que no hay lugar a exonerar de la condena en costas a la UGPP, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en tanto resultó vencida en juicio y se exhibe palmario que no dio cumplimiento oportuno a la totalidad de las condenas que le fueron impuestas en la sentencia que se ejecuta, lo cual pudo hacer aun en vida de la señora Lucía del Rosario Restrepo de Arango, conducta con la cual propició la demanda ejecutiva.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE:


PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto proferido el 21 de abril de 2023, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por MARIA ELENA RESTREPO DE MERIZALDE, ALONSO RESTREPO MESA, MARTA CECILIA RESTREPO MESA, OLGA DE SANTISIMA TRINIDAD RESTREPO DE RESTREPO, JORGE ALBERTO RESTREPO MESA, JUAN JOSE RESTREPO MESA, ANA MARIA RESTREPO MESA y CARMEN RESTREPO DE RESTREPO, en contra de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES–U.G.P.P.

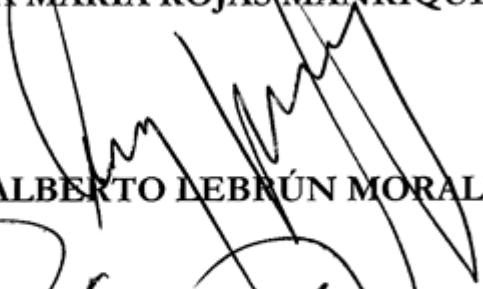
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 moneda legal.


TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N
091 del 30 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>